

INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Al Despacho de la señora Juez el expediente No. **2021-00096**, informando que las comunicaciones enviadas al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Concesión Sábana de Occidente S.A.S. no fueron contestadas, mientras que las demás entidades rindieron el informe requerido y a la fecha se encuentra para resolver la presente **ACCIÓN DE TUTELA**. Sírvase proveer.

ANA RUTH MESA HERRERA
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

I. ANTECEDENTES

El señor Guillermo Alonso Castillo Contreras, identificado con C.C. 231.079, instauró acción de tutela en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Dirección Territorial de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición.

Como fundamento de sus pretensiones indicó que desde el 30 de enero de 2020 solicitó a la Dirección Territorial de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi la actualización de la cabida y linderos del predio identificado con cédula catastral 01-00-0009-0019-000 y matrícula inmobiliaria 156-139982. Tal solicitud fue también radicada ante la sede principal del I.G.A.C. el 3 de marzo de 2020 y reiterada el 14 de agosto del mismo año y el 10 de febrero de 2021 ante la Dirección Territorial de Cundinamarca.

Por otra parte, el accionante indicó que las peticiones obedecen a la realización de una obra de infraestructura en la vía Bogotá – Villeta, donde el tutelante se ve compelido a enajenar el predio. Asimismo, aclaró que la Concesión Sábana de Occidente S.A.S. ya había solicitado la actualización de la información antes mencionada.

En razón de lo anterior, solicitó el amparo de su derecho fundamental y que se ordene a la entidad que dé respuesta a la solicitud del 30 de enero de 2020, expidiendo el acto administrativo correspondiente.

II. TRÁMITE Y CONTESTACIÓN

La presente acción fue admitida mediante auto del 25 de febrero de 2021. Allí se ordenó vincular a la Concesión Sábana de Occidente S.A.S. y a la Agencia Nacional de Infraestructura, así como librar comunicación a las encartadas para que rindieran un informe detallado acerca de cada uno de los hechos y pretensiones enunciados por la parte actora.

La **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** dio contestación a la acción de tutela el 26 de febrero del año que avanza, solicitando que se le desvinculara de la acción de tutela, debido a que el presunto agravio del derecho fundamental se le enrostra al I.G.A.C.

La **DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI** se pronunció sobre la presente acción el 1º de marzo del presente año, indicando que con las Resoluciones 25-402-0009-2021 y 25-402-0010-2021 se realizó tanto la actualización de la matrícula inmobiliaria, como la corrección de la información del área del predio. Estas resoluciones fueron comunicadas al accionante, mediante oficio 6010.7-2021-0001278-EE-0001 del 26 de febrero de 2021 y a la Concesión Sabana de Occidente mediante oficio 6010.7-2021-0001279-EE-0001 del 26 de febrero de 2021.

El **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI Y LA CONCESIÓN SÁBANA DE OCCIDENTE S.A.S.** no dieron contestación a la presente acción de tutela.

Así las cosas, no obraban en el plenario las resoluciones señaladas por la Dirección Territorial de Cundinamarca del I.G.A.C., por lo que este Despacho procedió a requerir las mismas, mediante auto del 3 de marzo de 2021. Tales actos administrativos fueron aportados a través del mail recibido el 4 de marzo del año que avanza.

III. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en determinar si se vulneran los derechos fundamentales del accionante ante la presunta omisión de las encartadas de dar respuestas a las solicitudes radicadas.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Es competente este Despacho para conocer de la presente acción constitucional, con fundamento en el artículo 86 Superior, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1º del art. 1º del D. R. 1382 de 2000 y el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017.

2. Del derecho de petición.

Frente a la prerrogativa fundamental de petición, debe decirse que ésta fue elevada a rango constitucional en el canon 23 de la Carta Política; que se configura como una garantía subjetiva que concede a las personas la facultad de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades y, además, a obtener pronta resolución a ellas, amén de que es una vía expedita que exige un pronunciamiento oportuno.

Dicho derecho, además fue desarrollado en la Ley 1755 de 2015, en la que se indicaron las reglas generales para presentar y contestar el derecho de petición, estableciéndose en su primer artículo "Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011", refiriendo entonces el artículo 13 de la normativa sustituida que:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos de este código, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma respuesta".

En el mismo compendio normativo, se dispusieron los términos que se deben tener en cuenta para resolver los derechos de petición, de la siguiente manera:

"Art. 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017, memorada en el proveído T-044 de 2019, indicó que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con las siguientes características para que se considere que se encuentra satisfecha el derecho fundamental bajo estudio:

"(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario."

(ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.

(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado."

Sin embargo, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional es consistente en sostener que el derecho de petición no supone que la Administración deba acceder a lo pedido, como se vio en la ya citada sentencia T-044 de 2019, en la que se dijo:

"Esta Corporación ha destacado además que la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del "el derecho a lo pedido", que se emplea con el fin de destacar que "el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal."

Aunado a las anteriores consideraciones, encuentra esta Juzgadora que el derecho de petición, como los demás derechos fundamentales, cuentan con unos

componentes que constituyen su núcleo esencial y otros que son denominados elementos estructurales. Los primeros son características ontológicas de las prerrogativas constitucionales, mientras que los segundos se erigen como factores circundantes que permiten la garantía del derecho fundamental y que guardan cercanía con el núcleo esencial. De esta forma se expuso en sentencia C-007 de 2017:

"Este Tribunal ha precisado el entendimiento de los últimos tres requisitos en el sentido de establecer que los elementos estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial, delimitado por la Constitución. Adicionalmente, ha definido el núcleo esencial como "como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo debe entenderse "el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental".

Entonces, abarcando propiamente el artículo 23 de la Constitución Política, la Corte Constitucional describió dichos axiomas en la sentencia T-058 de 2018, así:

"Siguiendo estas consideraciones, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se estudió el Proyecto de Ley Estatutaria "(p)or medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", precisó que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) la respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión. En concordancia, se ha precisado que sus elementos estructurales son: (i) el derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular; (ii) la solicitud puede ser presentada de forma verbal o escrita; (iii) la petición debe ser formulada respetuosamente; (iv) la informalidad en la petición; (v) la prontitud en la resolución; y (vi) la competencia del Legislador para reglamentar su ejercicio ante organización privadas".

En este punto, valga hacer énfasis acerca de la preponderancia que detenta la prueba documental que acredita el efectivo enteramiento al peticionario de la respuesta generada por la entidad pública o el particular receptor de la petición, pues sin esta no es posible perfeccionar el núcleo esencial del derecho de

petición, como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional en sentencia T-149 de 2013:

"La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas.

A partir de esta reflexión, es claro que si la entidad está obligada a tener una constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada".

Para el *sub examine*, esta Juez encuentra que las peticiones radicadas versan sobre la actualización de la información catastral del predio identificado con cédula catastral 01-00-0009-0019-000 y matrícula inmobiliaria 156-139982; sin embargo, se acota que la cédula catastral es la 01-00-0013-0004-00, conforme a las peticiones de la Concesión Sábana de Occidente S.A.S.

Frente a ello, la Dirección Territorial de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi dio respuesta con las resoluciones No. 25-402-0009-2021 del 25 de febrero de 2021 y 25-402-0010-2021 del 26 de febrero de 2021, las cuales resolvieron sobre la rectificación de folios de matrículas, el avalúo y frente a la cabida del inmueble se expuso que se procedió a rectificar el área del terreno, quedando vigente en la base de datos catastral con 469 m2.

Así, considera el Despacho que la entidad emitió una respuesta de forma clara, congruente, completa y de fondo, como quiera que se pronunciaron puntualmente frente a las solicitudes realizadas en torno a la actualización de información del predio, expidiendo los actos administrativos correspondientes. También se evidencia que las respuestas estuvieron notificadas de forma personal, por lo que se presenta un hecho superado.

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que cuando la vulneración o la amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado "hecho superado", tal y como la Corte lo reiteró en sentencia T- 297 de 2019:

Con relación a primera categoría (carencia actual de objeto por hecho superado), el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos:

"Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes".

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado.

En tal sentido esta Corporación ha señalado los criterios que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos criterios son los siguientes:

- "1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.*
- 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.*
- 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado".*

En conclusión, con el pronunciamiento claro, expreso, completo y de fondo por parte de la Dirección Territorial de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con la notificación de las respuestas se resarcieron todos los perjuicios que se pudieron irrogar al peticionario, por lo que desapareció la vulneración al derecho fundamental de petición, motivo por el cual se negará la acción ante la carencia actual de objeto por hecho superado.

V. DECISIÓN

En razón a lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **NEGAR EL AMPARO DEL DERECHO DE PETICIÓN**, en la acción instaurada por el señor Guillermo Alonso Castillo Contreras, identificado con C.C. 231.079, por presentarse una carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a lo antes estudiado.

SEGUNDO: **NOTIFICAR** la presente providencia a las partes a través de correo electrónico, de conformidad con el Acuerdo PCSJA20-11632 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y en atención a la situación sanitaria del país por la enfermedad denominada COVID-19.

TERCERO: **ENVIAR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión si en el término de ejecutoria esta decisión no es impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,



YUDY ALEXANDRA CHARRY SALAS

Kjma.